

IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

In re:

LEISURE INVESTMENTS HOLDINGS
LLC, *et al.*,¹

Debtors.

Chapter 11

Case No. 25-10606 (LSS)

(Jointly Administered)

DEBTORS' NOTICE OF FILING OF THE DECLARATION OF MARGARITA LUNA RAMOS IN SUPPORT OF DEBTORS' MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER (I) ENFORCING (A) THE AUTOMATIC STAY AND (B) THE COURT'S ORDER COMPELLING DEBTORS' FORMER OFFICERS AND OTHER REQUIRED PERSONS TO TURN OVER RECORDS, AND (II) GRANTING RELATED RELIEF

PLEASE TAKE NOTICE that in connection with the (i) *Debtors' Motion for Entry of an Order (I) Compelling Debtors' Former Officers and Other Required Persons to Turn Over Records and (II) Granting Related Relief* [Docket No. 7] and (ii) *Debtors' Motion for Entry of an Order (I) Enforcing (A) the Automatic Stay and (B) the Court's Order Compelling Debtors' Former Officers and Other Required Persons to Turn Over Records, and (II) Granting Related Relief* [Docket No. 73] (collectively, the "**Motions**"), and in connection with the *Debtors' Notice Pursuant to Rule 44.1 of the Federal Rules of Civil Procedure* [Docket No. 152], the above-captioned debtors and debtors in possession (collectively, the "**Debtors**"), hereby file the declaration of Margarita Luna Ramos (the "**Luna Declaration**"), the Spanish-language version is

¹ Due to the large number of Debtors in these chapter 11 cases a complete list of the Debtors is not provided herein. A complete list of the Debtors along with the last four digits of their tax identification numbers, where applicable, may be obtained on the website of the Debtors' noticing and claims agent at <https://veritaglobal.net/dolphinco>, or by contacting counsel for the Debtors. For the purposes of these chapter 11 cases, the address for the Debtors is Leisure Investments Holdings LLC, c/o Riveron Management Services, LLC, 600 Brickell Avenue, Suite 2550, Miami, FL 33131.



attached hereto as **Exhibit 1**, and the English-language version of the Luna Declaration is attached hereto as **Exhibit 2**.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that the Spanish-language exhibits and the certified English translations of the exhibits attached to the Luna Declaration will be provided to the Court and to counsel for Mr. Eduardo Albor in the near term.

Dated: May 19, 2025

/s/ Sean T. Greecher

YOUNG CONAWAY STARGATT & TAYLOR, LLP

Robert S. Brady (No. 2847)

Sean T. Greecher (No. 4484)

Allison S. Mielke (No. 5934)

Jared W. Kochenash (No. 6557)

Rodney Square

1000 North King Street

Wilmington, DE 19801

Telephone: (302) 571-6600

Email: rbrady@ycst.com

sgreecher@ycst.com

amielke@ycst.com

jkochenash@ycst.com

Counsel to the Debtors and Debtors in Possession

EXHIBIT 1

**EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO
DE DELAWARE**

En relación:

Capítulo 11

LEISURE INVESTMENTS HOLDINGS LLC,
et al.,¹

Caso No. 25-10606 (LSS)

Deudores.

(Conjuntamente
Administrado)

Expediente Ref. No. 73

**DECLARACIÓN DE MARGARITA LUNA RAMOS EN APOYO DE LA PETICIÓN DE
LOS DEUDORES PARA QUE SE DICTE UNA ORDEN (I) DE EJECUCIÓN (A) DE LA
SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA Y (B) DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL QUE OBLIGA A
LOS ANTIGUOS FUNCIONARIOS DE LOS DEUDORES Y A OTRAS PERSONAS
OBLIGADAS A ENTREGAR REGISTROS, Y (II) DE CONCESIÓN DE LAS ÓRDENES
RELACIONADAS**

Yo, Margarita Luna Ramos, de conformidad con 28 U.S.C. § 1746 y la Regla 44.1 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, estoy debidamente autorizada para y declaro y/o certifico lo siguiente:

1. Soy mayor de 18 años y presento esta declaración (esta "**Declaración**") basada en mi propio conocimiento personal y en la información documental y verbal que me ha sido proporcionada, en nombre de los Deudores en apoyo de la *Petición de los Deudores para que se dicte una Orden (I) de Ejecución (A) de la Suspensión Automática y (B) de la Orden del Tribunal que Obliga a los Antiguos Funcionarios de los Deudores y a Otras Personas Obligadas a Entregar Registros, y (II) de Concesión de las Órdenes Relacionadas* [Docket No. 73].

2. Soy Abogada, Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¹ Debido al gran número de deudores en estos casos del capítulo 11, que están siendo administrados conjuntamente, no se proporciona aquí una lista completa de los Deudores. Puede obtenerse una lista completa de los deudores junto con los cuatro últimos dígitos de sus números de identificación fiscal, en su caso, en el sitio web del agente de notificaciones y reclamaciones de los deudores en <https://veritaglobal.net/dolphinco>, o poniéndose en contacto con el abogado de los deudores. A los efectos de estos casos del capítulo 11, la dirección de los Deudores es Leisure Investments Holdings LLC, c/o Riveron Management Services, LLC, 600 Brickell Avenue, Suite 2550, Miami, FL 33131.



(Estados Unidos Mexicanos). Ocupé este cargo del 2004 al 2019. Antes de incorporarme a la Suprema Corte de Justicia, fui Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (una corte constitucional) con residencia en la Ciudad de México. A lo largo de mi carrera, trabajé por casi 44 años en el Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, donde ocupé todos los cargos del escalafón de la carrera judicial. Actualmente soy consejera en el despacho Von Wobeser y Sierra, S.C e integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui la primera mujer en ocupar los siguientes cargos: presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1985), presidenta de la reunión nacional de jueces de distrito (1992), magistrada en materia electoral (1994) y la primera mujer consejera de la Judicatura Federal por oposición (2003). También fui presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (2015), presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2017) y vicepresidenta de la *International Association of Women Judges* (Asociación Internacional de Jueces Mujeres) (2018), entre otros cargos.

3. Esta Declaración se redacta en idioma español y se traduce al inglés por perito oficial.

4. Miembros del bufete de abogados Guerra González y Asociados, S.C., abogados litigantes de los Deudores en México, me explicaron que entre 2019 y 2022, ciertos acreedores otorgaron varios financiamientos a Grupo Dolphin y que dichos financiamientos fueron garantizados con las acciones de todas las empresas que conforman Grupo Dolphin y que, ante la actualización de un evento de incumplimiento, los acreedores tienen derecho a activar mecanismos contractuales para ejercer el voto corporativo de Grupo Dolphin. De igual manera, se me explicó que ante la falta de pago (evento de incumplimiento) de Grupo Dolphin, en ejercicio del voto corporativo que corresponde a los acreedores mediante el mecanismo pactado, el 28 de marzo de 2025, se llevaron a cabo diversas asambleas de Grupo Dolphin. También se me explicó que los

contratos que prevén los mecanismos contractuales para ejercer el voto corporativo de Grupo Dolphin se encuentran aportados en este proceso.

5. Tuve a la vista las actas de asambleas y resoluciones llevadas a cabo el 28 de marzo de 2025 de las sociedades Aqua Tours, S.A. de C.V., Controladora Dolphin, S.A. de C.V., Dolphin Austral Holdings, S.A. de C.V., Dolphin Capital Company, S. de R.L. de C.V., Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V., Promotora Garrafón, S.A. de C.V. y Viajero Cibernético, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, los "**Grupo Dolphin**") mediante las cuales los accionistas de las sociedades de Grupo Dolphin resolvieron: (a) la remoción de consejeros del Grupo Dolphin, (b) la revocación de poderes de dichos individuos, (c) nombramiento de Steven Robert Strom como "Administrador Único", y (d) nombramiento de nuevos apoderados del Grupo Dolphin. Además (en lo sucesivo, los "Cambios de Gobierno"). Los hechos narrados en el punto 4 anterior, se encuentran relacionados en las actas de asamblea y resoluciones aquí referidas. Se adjunta como **anexo A**, como ejemplo, una de las actas protocolizada ante Notario Público respecto a los Cambios de Gobierno de Controladora Dolphin S.A. de C.V.

6. Mediante resolución, adjunta como **anexo B**, de fecha 4 de Abril de 2025 y publicada el 7 de **abril** de 2025 (la "**Resolución del 4 de Abril**"), el Juez Décimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México (el "**Juez de México**") admitió a trámite la demanda bajo el expediente 222/2025 (el "**Proceso Inicial**") promovida por las sociedades que integran Grupo Dolphin en contra de diversos codemandados, incluyendo a Eduardo de Martín Albor Villanueva (el "**Sr. Albor**" o el "**Ex Director General**") y BBVA Bancomer. El objeto principal del Proceso Inicial es reclamar al Ex Director General y demás demandados, la rendición de cuentas por las gestiones que éstos realizaron como miembros del consejo de administración de las empresas de Grupo Dolphin hasta la fecha en que fueron removidos.

7. De conformidad con la Resolución del 4 de Abril, el Juez de México concedió ciertas



medidas cautelares en términos del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para mantener la situación de hecho existente respecto a las asambleas correspondientes a los Cambios de Gobierno mediante las cuales los accionistas de las empresas de Grupo Dolphin resolvieron: (a) la remoción de consejeros del Grupo Dolphin, (b) la revocación de poderes de dichos individuos, (c) nombramiento de Steven Robert Strom como "Administrador Único", y (d) nombramiento de nuevos apoderados del Grupo Dolphin. Además, la Resolución del 4 de Abril ordenó (x) a los antiguos administradores y apoderados de Grupo Dolphin que se abstuvieran de representar a Grupo Dolphin o de disponer de los activos de Grupo Dolphin, y (y) a todos los empleados y ejecutivos del Grupo Dolphin que cooperaran, apercibidos con sanciones para el caso de incumplimiento, con la nueva administración del Grupo Dolphin. La Resolución del 4 de Abril estableció además que las asambleas de accionistas y resoluciones celebradas el 28 de marzo de 2025 y las resoluciones ahí adoptadas en relación con los Cambios de Gobierno se mantenían vigentes y en cumplimiento.

8. Las medidas cautelares previstas en el artículo 384 del Código de Procedimientos Civiles son similares a una orden judicial provisional, que permiten que el Juez ordene que se mantenga una situación de hecho existente; es decir, sin que pueda modificar la situación de hecho al momento de que se solicitó la medida. En este sentido la norma que sirve de base para este tipo de ordenes judiciales dispone: "*Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.*"

9. Tras la emisión de la Resolución del 4 de Abril, el Ex Director General promovió una acción ordinaria mercantil (el "**Proceso Subsecuente**") en contra de CIBanco, Institución de Banca Múltiple (como fiduciario del Fideicomiso de Garantía Irrevocable No. CIB/2380), Wilmington Trust, National Association, y Marco Antonio Vaca Vélez, notario público, No. 142

de la Ciudad de México. El proceso Subsecuente se tramita ante el Juez de México bajo el expediente 256/2025. De esa manera, el Ex Director General, ya está haciendo valer los derechos que estima le corresponden por su propio derecho y como accionista de Aqua Tours, S.A. de C.V., Controladora Dolphin, S.A. de C.V., Dolphin Austral Holdings, S.A. de C.V., Promotora Garrafón, S.A. de C.V. y Viajero Cibernético, S.A. de C.V. y ostentándose como representante legal de Dolphin Capital Company, S. de R.L. de C.V. y Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V. De esa manera, en caso de que su demanda prospere, tendrá recursos legales para satisfacer las pretensiones que sean reconocidas en la sentencia que potencialmente pudiera dictarse. Es pertinente aclarar que la medida cautelar contenida en la Resolución del 4 de Abril, fue decretada, entre otras cosas para tener por removido de su cargo al Sr. Albor, como miembro del consejo de administración de Grupo Dolphin. Dicha medida surtió efectos desde la fecha de su emisión, por tanto, el Sr. Albor, ya no tenía la representación de la manera en que se ostentó para la promoción del Proceso Subsecuente (juicio ordinario 256/2025). El promovente del Proceso Subsecuente solicitó una medida cautelar para, entre otras cosas, suspender y/o invalidar los Cambios de Gobierno y mediante una resolución fechada el 10 de abril de 2025, publicada el 11 de abril de 2025, que se adjunta al presente como **anexo C** (la "**Resolución del 11 de Abril**"), el Juez de México concedió, sin efectos restitutorios: (i) la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas para efectuar los Cambios de Gobierno, y (ii) la suspensión del ejercicio de los derechos corporativos sobre las acciones representativas del capital social de Dolphin Austral Holdings, S.A. de C.V., Aqua Tours, S.A. de C.V. y Dolphin Capital Company, S. de R.L. de C.V.

10. El Proceso Inicial y el Proceso Subsecuente, son juicios ordinarios tramitados ante el mismo Juez de México en el fuero común de la Ciudad de México. La Resolución del 4 de Abril y la Resolución del 11 de Abril fueron emitidas en juicios de la misma naturaleza (ordinaria) y son contradictorias entre si. El procedimiento que regula la sustanciación de juicios ordinarios, como el



Proceso Inicial y el Proceso Subsecuente, prevé recursos ordinarios específicos para impugnar las resoluciones que se dicten durante el juicio.

11. La Resolución del 11 de Abril fue impugnada por CIBanco, Institución de Banca Múltiple (como fiduciario del Fideicomiso de Garantía Irrevocable No. CIB/2380 y titular de los derechos corporativos de Grupo Dolphin) mediante un juicio de amparo (el "**Amparo del Fiduciario**"). El juicio de amparo es un recurso extraordinario de control constitucional de carácter federal que tiene como principal objetivo asegurar la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas frente a actos, omisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad en Mexico. Para mantener la materia del juicio de amparo, la ley prevé la posibilidad de que se otorgue, de oficio o a petición de parte, la suspensión del acto reclamado. De esa manera, es mediante la referida suspensión que se impide que el acto reclamado se consume en forma irreparable y que ello haga ilusoria la protección de la justicia federal. Las resoluciones dictadas por los jueces de amparo (de fuero federal) deben ser acatadas por las autoridades que violenten derechos humanos. En este caso por el Juez de México (de fuero común).

12. El Amparo del Fiduciario se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil (tribunal del fuero federal), con sede en la Ciudad de México (el "**Juzgado de Distrito**"), bajo el expediente 443/2025. La demanda de amparo fue admitida el 29 de abril de 2025 y, en esa misma fecha, se emitió una suspensión provisional (la "**Suspensión Provisional**") que ordenó que no se ejecute la Resolución del 11 de Abril, lo cual implica que la Resolución del 4 de Abril sí es ejecutable. Se adjunta copia de la Suspensión Provisional como **anexo D**. Los efectos de la Suspensión Provisional, quedaron plasmados como sigue: *"No se ejecute el auto de diez de abril de dos mil veinticinco, dictado en el juicio ordinario mercantil 256/2025, por el Juez Décimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, únicamente en lo referente a la concesión de las providencias precautorias solicitadas por la actora; esto es, dichas medidas cautelares no podrán*

surtir efecto legal alguno." La Suspensión Provisional surtió efectos desde el momento de su concesión, es decir, el 29 de abril de 2025. Posteriormente, el 9 de mayo de 2025, el Juez de Distrito emitió una suspensión definitiva (la "**Suspensión Definitiva**") que ordenó que no se ejecute la Resolución del 11 de Abril. Se adjunta copia de la Suspensión Definitiva como **anexo E**. La Suspensión Definitiva suplió a la Suspensión Provisional.

13. El 13 de mayo de 2025, a solicitud del Ex Director General, el Juez de Distrito emitió una resolución que establece que si dicha parte exhibe una contragarantía por \$200,000 pesos, la Suspensión Definitiva puede dejar de surtir efectos, aclarando en dicho auto que la suspensión definitiva no se levantaría hasta en tanto no estuviera exhibida la fianza y fuera aprobada por el Juez de Amparo. Se adjunta como **anexo F**, copia de dicha resolución. La referida resolución del 13 de mayo de 2025 fue impugnada mediante un recurso de queja interpuesto el 14 de mayo de 2025, el cual se adjunta como **anexo G**. En virtud de dicha impugnación, la resolución del 13 de mayo de 2025 se encuentra sub júdice. A la fecha en que se firma esta Declaración, la lista de acuerdos dictados y publicados por el Juzgado de Distrito, no refleja que exista una resolución que establezca que la contragarantía fue debidamente exhibida, ni resolución que declare que la Suspensión Definitiva dejó de surtir efectos. Por tanto, es válido concluir con que, a la fecha de firma de esta Declaración, la Suspensión Definitiva continúa vigente.

14. Posterior y adicionalmente, la Resolución del 11 de Abril fue impugnada por CIBanco, Institución de Banca Múltiple (como fiduciario del Fideicomiso de Garantía Irrevocable No. CIB/2380 y titular de los derechos corporativos de Grupo Dolphin) mediante una apelación. La apelación fue admitida por el Juez de México el 15 de mayo de 2025 bajo la modalidad de "ambos efectos" en términos del artículo 1345 bis 8 del Código de Comercio. La modalidad de "ambos efectos" significa que la apelación fue admitida con efecto suspensivo y, por tanto, que la ejecución de la Resolución del 11 de Abril queda suspendida hasta que se resuelva el fondo de la



apelación (la "**Apelación Suspensiva**"). En ese sentido, debido a la Apelación Suspensiva, la Resolución del 11 de Abril carece fuerza de ejecución en tanto no sea resuelta la apelación en cuestión. Se adjunta copia de la apelación y de la resolución que la admite con efectos suspensivos como **anexos H y I**.

15. Aunque las Resoluciones del 4 y 11 de Abril son contradictorias en ciertos aspectos, por ejemplo la Resolución del 4 de Abril ordena que se mantengan las resoluciones adoptadas en relación con los Cambios de Gobierno y la Resolución del 11 de Abril suspende tales efectos sin efectos restitutorios, aun si la Resolución del 11 de Abril no fuera revocada, las medidas cautelares contenidas en la Resolución del 4 de Abril siguen prevaleciendo por varias razones.

16. En primer lugar, desde hace mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados han establecido que, cuando dos resoluciones se contradicen, debe prevalecer la resolución emitida en primer lugar. Adjunto como **anexo J** un resumen de los precedentes más relevantes en la materia. Este resumen se refiere a resoluciones judiciales en general, que son aplicables a medidas cautelares como la contenida en la Resolución del 11 de Abril. De conformidad con los derechos fundamentales de certeza jurídica tutelados por la Constitución y en congruencia con el principio de firmeza procesal, un juez no puede revocar sus propias determinaciones, a menos de que exista un hecho superveniente que lo justifique, lo cual no sucede en el presente caso. Por lo tanto, si una segunda resolución contradice a la primera que permanece válida y ejecutable, la segunda resolución carece de la fuerza legal para revocar la primera resolución. Además, debe tenerse en cuenta que la segunda resolución implicaría una revocación inconstitucional de la primera, lo que significa que sólo la Resolución del 4 de abril puede ejecutarse legalmente.

17. En segundo lugar, la Resolución del 11 de Abril establece expresamente que las medidas cautelares ahí decretadas, no tienen "efectos restitutorios", lo que significa que la

Resolución del 11 de Abril no puede invalidar actos materializados con anterioridad, tales como las resoluciones de Cambios de Gobierno y actos ejecutados en cumplimiento con ellas, así como resoluciones y medidas emitidas con anterioridad, como sería el caso de la Resolución del 4 de Abril. Dado que la Resolución del 11 de Abril no tuvo efectos restitutorios, la Resolución del 4 de Abril sigue siendo válida y ejecutable. Inclusive, el 25 de abril de 2025, el propio Juez de México emitió un auto aclaratorio reiterando que la Resolución del 11 de Abril no tienen efectos restitutorios. Ello significa que la la Resolución del 11 de Abril no puede tener efecto alguno sobre las resoluciones relativas a los Cambios de Gobierno de Grupo Dolphin y que son tuteladas cautelarmente por la Resolución del 4 de Abril. Se adjunta como **anexo K**, copia de la resolución del 25 de abril de 2025.

18. En tercer lugar, el propio Juez de México, advirtió la contradicción de sus resoluciones y, aunque está reservado para acordar un incidente de acumulación en el Proceso Inicial, para definir en todo caso cual de las ordenes debería prevalecer, mediante resolución del 25 de abril de 2025, el Juez de México estableció que las asambleas llevadas a cabo el 28 de marzo de 2025 respecto a los Cambios de Gobierno, siguen gozando de validez y la presunción de haber sido realizadas conforme a derecho. Por tanto, al día de hoy, la Resolución del 11 de Abril, que pretendió suspender la asambleas de los Cambios de Gobierno, no limita la eficacia de los Cambios de Gobierno que además están tutelados por la Resolución del 4 de Abril. Esa resolución no fue recurrida por las partes del procedimiento. Se adjunta como **anexo L**, copia de la resolución del 25 de abril de 2025. Conforme a información pública disponible en el Sistema de Consulta de Datos de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se identifican dos amparos promovidos por el Sr. Albor en contra de la Resolución del 4 de Abril dictada por el Juez de México en el Proceso Inicial. Dichos amparos se asignaron al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, bajo los expedientes 354/2025 y 406/2025. En virtud de que el objeto de dichas demandas de



amparo es precisamente controvertir resoluciones del Proceso Inicial, es razonable considerar que Sr. Albor ya es sabedor del Proceso Inicial y lo en él actuado.

19. En cuarto lugar, la Resolución del 11 de Abril contraviene lo dispuesto por el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues lejos de mantener una situación de hecho existente, en realidad altera la situación de hecho existente. En efecto, la solicitud de una medida cautelar es un procedimiento auxiliar que tiene por objeto mantener una situación de hecho existente, es decir, preservar y proteger una situación de hecho o un derecho en tanto se resuelve un litigio principal. Las medidas cautelares deben ser solicitadas por una persona con un interés legítimo, que debe probar la apariencia del buen derecho y la existencia de un peligro en la demora. Si el Juez de Mexico ya había tenido por acreditada la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora a los promoventes del Proceso Inicial, para él era un hecho notorio que las pretensiones cautelares del promovente del Proceso Subsecuente eran notoriamente incompatibles con la Resolución del 4 de Abril dictada en el Proceso Inicial. Ello es claro, pues la Resolución del 4 de Abril tuvo precisamente por objeto tutelar la situación de hecho existente con motivo de las resoluciones adoptadas en relación con los Cambios de Gobierno. En relación con lo anterior, destaca que en la Suspensión Definitiva, el Juez de Distrito ponderó lo siguiente respecto a las resoluciones adoptadas en relación con los Cambios de Gobierno que son objeto de la Resolución del 4 de Abril: (a) "*... el órgano supremo de una sociedad mercantil es la asamblea de accionistas, por lo que se estima que solamente dicho órgano estaría legitimado para obtener medidas cautelares como las reclamadas en el presente asunto, sobre todo si las mismas atentan en contra de la regular administración de la moral quejosa, razón por la que el suscrito juzgador estimó que dichas medidas resultan aparentemente inconstitucionales*". Ello significa que al no haber sido solicitadas las medidas cautelares que son objeto de la Resolución del 11 de abril por la asamblea de accionista de las sociedades de Grupo Dolphin, no es procedente que el promovente del Proceso

Subsecuente obtuviera medidas cautelares como las que son objeto de la Resolución del 11 de Abril, pues éstas atentan en contra de la regular administración de la sociedad promovente del juicio de amparo; y (b) *"se estima que se surte el riesgo de que personas extrañas puedan realizar mal manejo de la representación de la empresa, lo cual, puede traducirse en una afectación económica para la moral quejosa y los socios de esta, pues se actualizaría el riesgo de que perdieran el control que ejercen sobre la administración de la sociedad mercantil, permitiendo con ello que un accionista se beneficiara a costa y por encima de la voluntad del resto, sumado a que la consecución de los fines de la sociedad mercantil se podría tornar incompatible con la voluntad propia de la asamblea de accionistas que conforme al precepto antes citado, es el órgano supremo en una sociedad mercantil"*. Lo anterior significa que el Juez de Distrito consideró que la Resolución del 11 de Abril podría dar lugar a afectaciones de la sociedad y sus accionistas, pues privilegia los intereses de una minoría sobre la voluntad del de la mayoría de los accionistas y, en particular, de la asamblea de accionistas como el órgano máximo. Como se indicó en el párrafo 13, en la fecha en que se firma esta Declaración, la lista de acuerdos dictados y publicados por el Juzgado de Distrito, no refleja que exista una resolución que establezca que la contragarantía fue debidamente exhibida, ni resolución que declare que la Suspensión Definitiva dejó de surtir efectos. Por tanto, es válido concluir con que, a la fecha de firma de esta Declaración, la Suspensión Definitiva continúa vigente.

20. En quinto lugar, tuve a la vista las Asambleas Extraordinarias de Accionistas y Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas, respectivamente, de la entidades que conforman el Grupo Dolphin, mismas que fueron protocolizadas ante la fe del licenciado Marco Antonio Vaca Velez, notario público Numero 142 de la Ciudad de México el 16 de mayo de 2025, por virtud de las cuales los accionistas, entre otras cosas, ratifican los Cambios de Gobierno adoptados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas y Resoluciones Unánimes



adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas, respectivamente, el 28 de marzo de 2025 (las "**Ratificaciones de los Cambios de Gobierno**"). Las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno están formalizadas en escritura pública e inscritas en el Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio es una institución en México que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos relacionados con las sociedades mercantiles, para surtir efectos contra terceros. Las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno son actos jurídicos válidamente creados, que reflejan la voluntad de los accionistas como órgano máximo de cada entidad que conforma el Grupo Dolphin y que, en virtud de su inscripción en el Registro Público de Comercio, las resoluciones adoptadas en ellas son oponibles frente a terceros. De esa manera, la eficacia jurídica de Ratificaciones de los Cambios de Gobierno no se encuentra limitada por la Resolución del 11 de Abril. Ello es así, pues en la fecha de celebración de las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno, la Resolución del 11 de Abril carece de fuerza de ejecución. Se adjunta a la presente como **anexo M**, una de las actas protocolizadas ante Notario Público respecto a las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno correspondiente a la sociedad Controladora Dolphin S.A. de C.V.

21. En conclusión, la Resolución del 11 de Abril dictada en el Proceso Subsecuente carece de fuerza de ejecución porque: (i) fue controvertida mediante el Amparo del Fiduciario y encuentra suspendida conforme a la Suspensión Definitiva; (ii) se encuentra suspendida por la Apelación Suspensiva; (iii) conforme a lo explicado en el punto 16, ante su contradicción con la Resolución del 4 de Abril, la Resolución del 4 de Abril prevalece al haber sido dictada primero y gozar de validez y eficacia, aunado a que el Juez de México está impedido para revocar sus propias determinaciones, lo que va implícito en las contradicciones de la Resolución del 11 de Abril; (iv) conforme a lo explicado en el punto 17, la Resolución del 11 de Abril establece expresamente que las medidas cautelares ahí decretadas, no tienen "efectos restitutorios", lo que significa no puede

invalidar actos materializados con anterioridad, tales como los Cambios de Gobierno y la Resolución del 4 de Abril dictada en el Proceso Inicial; (v) La Resolución del 11 de Abril no incide sobre los Cambios de Gobierno conforme a la resolución referida en el punto 18; (vi) conforme a lo explicado en el punto 19, la Resolución del 11 de Abril contraviene lo dispuesto por el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues lejos de mantener una situación de hecho existente, en realidad altera la situación de hecho existente que está previamente tutelada por la Resolución del 4 de Abril dictada en el Proceso Inicial; y (vii) conforme a lo narrado en el punto 20, las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno son actos jurídicos válidamente creados, que reflejan la voluntad de la asamblea general de accionistas como órgano máximo de Grupo Dolphin y que, en virtud de su inscripción en el Registro Público de Comercio, son oponibles frente a terceros; y, de esa manera, la eficacia jurídica de las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno no se encuentra limitada por la Resolución del 11 de Abril. En línea con lo anterior, conforme a los Cambios de Gobierno, las Ratificaciones de los Cambios de Gobierno y la Resolución del 4 de Abril dictada en el Proceso Inicial, es válido afirmar que el Administrador Único de Grupo Dolphin, es Steven Robert Strom.

22. Tengo conocimiento de que, bajo la administración del Ex Director General, se solicitó que la sociedad Controladora Dolphin, S.A de C.V. se sujetara a concurso mercantil. Dicho procedimiento se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con Residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, bajo el expediente 1/2025 (el "**Concurso Mercantil**"). Mediante resolución del 28 de enero de 2025, el Juez de Distrito dictó las medidas cautelares que se adjuntan como anexo N (las "**Medidas del Concurso**").

23. No obstante que Controladora Dolphin, S.A. de C.V. solicitó 19 medidas específicas, el juez sólo concedió las siguientes medidas cautelares: (i) la prohibición a



Controladora Dolphin de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda de concurso mercantil; (ii) la suspensión de procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecución contra bienes o derechos de Controladora Dolphin; (iii) prohibición a Controladora Dolphin de enajenar bienes o constituir nuevos gravámenes sobre sus bienes; (iv) prohibición de realizar transferencias de fondos o activos a favor de terceros, salvo aquellos pagos que se consideren operación ordinaria; y (v) prohíbe rescindir los acuerdos celebrados con Controladora Dolphin como consecuencia de la presentación del procedimiento de insolvencia. Las medidas referidas en los puntos (i) a (iv) pueden consultarse en las página 6, 9 y 14 de las Medidas del Concurso, en donde el juez establece que fueron otorgadas de oficio. La medida referida en el punto (v) puede consultarse en la página 14 de las referidas Medidas del Concurso.

24. De esa manera, las Medidas del Concurso cautelares tenían por objeto proteger el patrimonio (bienes y derechos) de Controladora Dolphin, S.A de C.V. Tras revisar las Medidas del Concurso, puedo confirmar que las asambleas llevadas a cabo el 28 de marzo de 2025 relativas a los Cambios de Gobierno de Grupo Dolphin y la Resolución del 4 de Abril, no contravienen a las referidas Medidas del Concurso, pues se refieren al ejercicio de derechos corporativos de las acciones que conforman el capital social de Controladora Dolphin, S.A. de C.V.

25. Las acciones son títulos nominativos que representan una parte del capital social de una sociedad anónima y que otorgan a sus titulares (accionistas) los derechos corporativos y económicos que la ley y los estatutos de la sociedad concedan a los referidos titulares. Inclusive, el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la regla general de que una sociedad no puede adquirir las acciones emitidas por ella. De esa manera, es evidente que las acciones representativas del capital social emitidas por Controladora Dolphin, S.A de C.V. no son activos de dicha sociedad, pues son únicamente parte del patrimonio de sus titulares.

26. Conforme a las asambleas de Cambios de Gobierno, los titulares de los derechos de

voto de Grupo Dolphin adoptaron resoluciones que no afectan o inciden sobre ningún bien o derecho de Controladora Dolphin, S.A. de C.V. De igual manera, debido a que las acciones que Controladora Dolphin tenía sobre las demás sociedades de Grupo Dolphin, al ser afectas al fideicomiso de garantía identificado en las asambleas y resoluciones de los Cambios de Gobierno, quedaron extraídas del patrimonio de Controladora Dolphin, S.A. de C.V. y se desplazaron al patrimonio del fiduciario para los efectos convenidos en el contrato de fideicomiso. Se adjunta como **anexo O**, un precedente judicial que confirma dicho criterio.

27. Las Medidas del Concurso no contienen ninguna orden que impida a los accionistas de Controladora Dolphin y/o a los titulares del ejercicio de los derechos corporativos de las acciones de Grupo Dolphin, resolver sobre los Cambios de Gobierno. Por lo tanto, es válido concluir que los Cambios de Gobierno no contravinieron las Medidas del Concurso.

28. Finalmente, tuve a la vista el exhorto emitido por el Juez de México el 7 de abril de 2025 que se adjunta como **anexo P** (el "**Exhorto**"), mediante el cual solicitó el auxilio de un juez competente en Cancún, Quintana Roo, para la ejecución de la Resolución del 4 de Abril. De igual manera, tuve a la vista el auto del 10 de abril de 2025 que se adjunta como **anexo Q** mediante el cual el Juez Primero Mercantil de Cancún, Quintana Roo, radicó el Exhorto y ordenó su ejecución (el "**Auto de Ejecución**"). Del contenido del Exhorto y al Auto de Ejecución, se desprende que el Administrador Único designado en las asambleas de Cambios de Gobierno, estaba legitimado y facultado legalmente para tomar control de los activos y operación de Grupo Dolphin. Al respecto, es relevante destacar que la Resolución del 4 de Sbril ordenó girar oficios al Servicio de Administración Tributaria (autoridad fiscal mexicana similar al *Internal Revenue Service* de Estados Unidos) y a la Comisión Nacional Bancaria (autoridad mexicana que supervisa a las instituciones financieras mexicanas) para: (i) informar sobre la remoción de los miembros del Consejo de Administración de Grupo Dolphin como resultado de los Cambios de Gobierno; y (ii)



solicitar la implementación de todas las acciones necesarias para actualizar sus registros y permitir a Steven Robert Strom, como nuevo Administrador Único, operar el negocio de Grupo Dolphin.

Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América que el lo anterior es cierto y correcto.

Firmado el 16 de mayo de 2025.

Por:

Margarita Luna Ramos

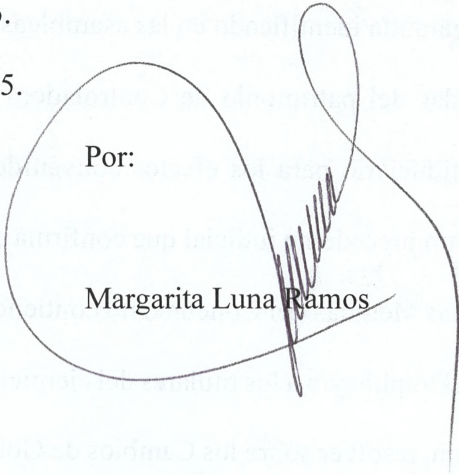


EXHIBIT 2

**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE**

In re: Chapter 11
LEISURE INVESTMENTS HOLDINGS LLC, Case No. 25-10606 (LSS)
et al.,¹ (Jointly Administered)
Debtors. **Docket Ref. No. 73**

**DECLARATION OF MARGARITA LUNA RAMOS IN SUPPORT OF
DEBTORS' MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER (I) ENFORCING (A) THE
AUTOMATIC STAY AND (B) THE COURT'S ORDER COMPELLING DEBTORS'
FORMER OFFICERS AND OTHER REQUIRED PERSONS TO TURN OVER
RECORDS, AND (II) GRANTING RELATED RELIEF**

I, Margarita Luna Ramos, pursuant to 28 U.S.C. § 1746 and Rule 44.1 of the Federal Rules of Civil Procedure, I am duly authorized to and do hereby declare and/or certify as follows:

1. I am over 18 years old and file this declaration (this "**Declaration**") based on my own personal knowledge and on the documents and verbal information that has been provided to me, on behalf of the Debtors in support of the *Debtors' Motion for an Order (I) Enforcing (A) the Automatic Stay and (B) the Court's Order Compelling Former Officers of the Debtors and Other Persons Compelled to Furnish Records, and (II) Granting the Related Orders* [Docket No. 73].

2. I am a lawyer, former Justice of the Supreme Court of the Mexican United States. I held this position from 2004 to 2019. Before joining the Supreme Court of Justice, I was a Magistrate of the Third Circuit Court in Administrative Matters (a constitutional court) located in Mexico City. Throughout my career, I worked for almost 44 years in the Federal Judiciary of the

¹ Due to the large number of debtors in these chapter 11 cases, which are being jointly administered, a complete list of the Debtors is not provided herein. A complete list of the Debtors along with the last four digits of their tax identification numbers, where applicable, may be obtained on the website of the Debtors' noticing and claims agent at <https://veritaglobal.net/dolphinco>, or by contacting counsel for the Debtors. For the purposes of these chapter 11 cases, the address for the Debtors is Leisure Investments Holdings LLC, c/o Riveron Management Services, LLC, 600 Brickell Avenue, Suite 2550, Miami, FL 33131

[Illegible
Signature]



Mexican United States, where I held all positions in the judicial career ladder. I am currently counsel at the law firm Von Wobeser y Sierra, S.C. and a member of the Board of Directors of the *Universidad Nacional Autónoma de México*. I was the first woman to hold the following positions: president of the College of Clerks of Study and Report of the Supreme Court of Justice of the Nation (1985), president of the national meeting of district judges (1992), magistrate in electoral matters (1994) and the first woman as board member of the Federal Judicial Council by competitive examination (2003). I was also president of the Inter-Institutional Committee for Gender Equality of the Federal Judiciary (2015), president of the Gender and Access to Justice Commission of the Ibero-American Judicial Summit (2017) and vice president of the International Association of Women Judges (2018), among other positions.

3. This Declaration is written in Spanish and translated into English by an official expert translator.

4. Members of the Guerra Gonzalez y Asociados, S.C. law firm, Mexican litigation counsel for the Debtors, explained to me that, between 2019 and 2022, certain creditors granted several financings to Grupo Dolphin and that such financings were secured by the shares of all the companies comprising Grupo Dolphin and that, upon the occurrence of an event of default, the creditors are entitled to activate contractual mechanisms to exercise the corporate vote of Grupo Dolphin. Likewise, it was explained to me that in the event of non-payment (event of default) of Grupo Dolphin, in exercise of the corporate vote that corresponds to the creditors through the agreed mechanism, on March 28, 2025, several meetings of Grupo Dolphin were held. It was also explained to me that the contracts that provide for the contractual mechanisms to exercise the corporate vote of Grupo Dolphin are already introduced in this process.

5. I had before me the minutes meetings and resolutions held on March 28, 2025 of the companies Aqua Tours, S.A. de C.V., Controladora Dolphin, S.A. de C.V., Dolphin Austral



Holdings, S.A. de C.V., Dolphin Capital Company, S. de R.L. de C.V., Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V., Promotora Garrafón, S.A. de C.V. and Viajero Cibernético, S.A. de C.V. (hereinafter, “**Grupo Dolphin**”), by means of which the shareholders of the companies of Grupo Dolphin resolved: (a) the removal of the directors of Grupo Dolphin, (b) the revocation of the powers of such individuals, (c) the appointment of Steven Robert Strom as “Sole Manager”, and (d) the appointment of new attorneys-in-fact of Grupo Dolphin. In addition (hereinafter, the “**Governance Changes**”). The facts described in paragraph 4 above are related in the minutes of the shareholders' meeting and resolutions referred to herein. Attached as **exhibit A**, as an example, is one of the minutes formalized before a Notary Public with respect to the Governance Changes of Controladora Dolphin S.A. de C.V.

6. By resolution, attached hereto as **exhibit B**, dated April 4, 2025 and published on April 7, 2025 (the “**April 4 Resolution**”), the Tenth Civil Judge of Written Process of Mexico City (the “**Mexico Judge**”) admitted for processing the lawsuit under file number 222/2025 (the “**Initial Proceeding**”) filed by the companies comprising Grupo Dolphin against several co-defendants, including Eduardo de Martín Albor Villanueva (“**Mr. Albor**” or the “**Former Chief Executive Officer**”) and BBVA Bancomer. The main purpose of the Initial Proceeding is to hold the Former Chief Executive Officer and other defendants, accountable for the actions they performed as members of the board of directors of the companies of Grupo Dolphin until the date they were removed.

7. Pursuant to the April 4 Resolution, the Mexico Judge granted certain injunctive relief in terms of article 384 of the Federal Code of Civil Procedures, to maintain the existing factual situation with respect to the meetings corresponding to the Governance Changes by which the shareholders of Grupo Dolphin's companies resolved to: (a) the removal of directors of Dolphin Group, (b) the revocation of the powers of such individuals, (c) appointment of Steven Robert



[Illegible
Signature]

Strom as “Sole Manager”, and (d) appointment of new attorneys-in-fact of Grupo Dolphin. In addition, the April 4 Resolution ordered (x) the former directors and attorneys-in-fact of Grupo Dolphin to refrain from representing Grupo Dolphin or disposing of Grupo Dolphin's assets, and (y) all employees and officers of Grupo Dolphin to cooperate, subject to penalties for non-compliance, with the new management of Grupo Dolphin. The April 4 Resolution further stated that the shareholders' meetings and resolutions held on March 28, 2025 and the resolutions adopted thereunder in connection with the Governance Changes remained in effect and are enforceable.

8. The injunctive relief provided for in Article 384 of the Code of Civil Procedures is similar to a provisional injunction, which allows the Judge to order that an existing factual situation be maintained; that is, without being able to modify the factual situation at the time the injunction was requested. In this sense, the norm that serves as a basis for this type of judicial order provides: *"Article 384. Before the commencement of the trial, or during its development, all measures necessary to maintain the existing factual situation may be decreed. These injunctions shall be decreed without hearing the opposing party, and shall not admit any appeal whatsoever. The resolution denying the measure may be appealed."*

9. Following the issuance of the April 4 Resolution, the Former Chief Executive Officer filed an ordinary commercial action (the “**Subsequent Proceeding**”) against CIBanco, Institución de Banca Múltiple (as trustee of the Irrevocable Guarantee Trust No. CIB/2380), Wilmington Trust, National Association, and Marco Antonio Vaca Velez, Notary Public, No. 142 of Mexico City. The Subsequent Proceeding is being processed before the Mexico Judge under file number 256/2025. Thus, the Former Chief Executive Officer is already asserting the rights that he believes he is entitled to in his own right and as a shareholder of Aqua Tours, S.A. de C.V., Controladora Dolphin, S.A. de C.V., Dolphin Austral Holdings, S.A. de C.V., Promotora Garrafón, S.A. de C.V. and Viajero Cibernético, S.A. de C.V., and acting as legal representative of Dolphin



Capital Company, S. de R.L. de C.V. and Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V. Therefore, in the event that his lawsuit prevails, he will have legal remedies to satisfy the claims that are recognized in the judgment that could potentially be issued. It is pertinent to clarify that the injunctive relief contained in the April 4 Resolution was decreed, among other things, to have Mr. Albor removed from his position as a member of the board of directors of Grupo Dolphin. Said measure took effect as of the date of its issuance, therefore, Mr. Albor, no longer had the representation in the manner in which he represented himself for the filing of the Subsequent Proceeding (ordinary trial 256/2025). The plaintiff of the Subsequent Proceeding requested an injunction to, among other things, suspend and/or invalidate the Governance Changes and, by a resolution dated April 10, 2025, published on April 11, 2025, attached hereto as **exhibit C** (the "**April 11 Resolution**"), the Mexico Judge granted, without restitutory effects: (i) the suspension of the effects of the resolutions adopted to execute the Governance Changes, and (ii) the suspension of the exercise of the corporate rights over the shares representing the capital stock of Dolphin Austral Holdings, S.A. de C.V., Aqua Tours, S. A. de C. V. and Dolphin Capital Company, S. de R. L. de C. V.

10. The Initial Proceeding and the Subsequent Proceeding are ordinary lawsuits filed before the same Judge of Mexico in the local jurisdiction of Mexico City. The April 4 Resolution and the April 11 Resolution were issued in trials of the same nature (ordinary) and are contradictory to each other. The procedure that regulates the substantiation of ordinary trials, such as the Initial Proceeding and the Subsequent Proceeding, provides for specific ordinary remedies to challenge the resolutions issued during the trial.

11. The April 11 Resolution was challenged by CIBanco, Institución de Banca Múltiple (as trustee of the Irrevocable Guaranty Trust No. CIB/2380 and holder of the corporate rights of Grupo Dolphin) through an amparo action (the "**Trustee's Amparo**"). The amparo action is an



[Illegible
Signature]

extraordinary resource of constitutional control of federal character that has as its main objective to ensure the protection and guarantee of the human rights of all persons against acts, omissions or norms issued and applied by any authority in Mexico. In order to maintain the subject matter of the amparo action, the law provides for the possibility of granting, *ex officio* or at the request of a party, the stay of the challenged act. In this way, it is through such stay that the challenged act is prevented from being consummated in an irreparable manner, which could make the protection of the federal justice system illusory. The resolutions issued by amparo judges (federal jurisdiction) must be complied with by the authorities that violate human rights. In this case by the Mexico Judge (local jurisdiction).

12. The Trustee's Amparo was filed before the Second District Court in Civil Matters (court of federal jurisdiction), located in Mexico City (the "**District Court**"), under file number 443/2025. The amparo action was admitted on April 29, 2025 and, on that same date, a provisional stay (the "**Provisional Stay**") was issued ordering that the April 11 Resolution not be enforced, which implies that the April 4 Resolution is enforceable. A copy of the Provisional Stay is attached as **exhibit D**. The effects of the Provisional Stay were as follows: *"The order of April tenth, two thousand twenty-five, issued in the ordinary commercial trial 256/2025, by the Tenth Civil Judge of Written Process of Mexico City, is not executed, only with respect to the granting of the injunctive relief requested by the plaintiff; that is, said injunctive relief may not have any legal effect of any kind."* The Provisional Stay took effect from the moment it was granted, that is, on April 29, 2025. Subsequently, on May 9, 2025, the District Judge issued a definitive stay (the "**Definitive Stay**") which ordered that the April 11 Resolution not be enforced. A copy of the Definitive Stay is attached hereto as **exhibit E**. The Definitive Stay replaced the Provisional Stay.

13. On May 13, 2025, at the request of the Former Chief Executive Officer, the District Judge issued a resolution that provides that subject to the delivery of a counter-guarantee for



\$200,000.00 pesos, the Definitive Stay may cease to have effect, clarifying in such resolution that the definitive stay would not be lifted until the bond was submitted and approved by the Amparo Judge. A copy of said resolution is attached as **exhibit F**. The aforementioned resolution dated May 13, 2025 was challenged by means of a motion for review filed on May 14, 2025, which is attached hereto as **exhibit G**. By virtue of said motion for review, the resolution of May 13, 2025 is sub judice. As of the date of signature of this Declaration, the list of resolutions issued and published by the District Court does not reflect that there is a resolution establishing that the counter-guarantee was duly submitted, nor a resolution declaring that the Definitive Stay has ceased to have effects. Therefore, it is valid to conclude that, as of the date of signature of this Declaration, the Definitive Stay is still in effect.

14. Subsequently and additionally, the April 11 Resolution was challenged by CIBanco, Institución de Banca Múltiple (as trustee of the Irrevocable Guarantee Trust No. CIB/2380 and holder of the corporate rights of Grupo Dolphin) through an appeal. The appeal was admitted by the Mexico Judge on May 15, 2025 under the principle of "both effects" in terms of article 1345 bis 8 of the Commercial Code. The "both effects" principle means that the appeal was admitted with suspensive effect and, therefore, that the execution of the April 11 Resolution is suspended until the merits of the appeal are resolved (the "**Suspensive Appeal**"). In this regard, due to the Suspensive Appeal, the April 11 Resolution is not enforceable until the appeal in question is resolved. A copy of the appeal and of the resolution admitting it with suspensive effect are attached as **exhibits H and I**.

15. Although the Resolutions of April 4 and 11 are contradictory in certain aspects, for example the April 4 Resolution orders that the resolutions adopted in connection with the Governance Changes be maintained and the April 11 Resolution suspends such effects without restitutory effects, even if the April 11 Resolution were not revoked, the injunctive relief contained



[Illegible
Signature]

in the April 4 Resolution would still prevail for several reasons.

16. First, the Mexican Supreme Court of Justice and the Collegiate Courts have long established that when two resolutions contradict each other, the resolution issued first must prevail. Attached as **Exhibit J** is a summary of the most relevant precedents on the subject. This summary refers to judicial resolutions in general, which are applicable to injunctive relief as contained in the April 11 Resolution. In accordance with the fundamental rights of legal certainty protected by the Constitution and in congruence with the principle of procedural firmness, a judge cannot revoke his own determinations, unless there is a supervening fact that justifies it, which is not the case here. Therefore, if a second resolution contradicts the first resolution which remains valid and enforceable, the second resolution lacks the legal force to revoke the first resolution. Furthermore, it must be taken into account that the second resolution would imply an unconstitutional revocation of the first one, which means that only the April 4 Resolution can be legally enforceable.

17. Secondly, the April 11 Resolution expressly establishes that the injunction decreed therein do not have "restitutory effects", which means that the April 11 Resolution cannot invalidate previously materialized acts, such as the resolutions regarding the Governance Changes, resolutions and acts executed in compliance with them, as well as resolutions and measures issued previously, as would be the case of the April 4 Resolution. Since the April 11 Resolution did not have restitutory effects, the April 4 Resolution remains valid and enforceable. In fact, on April 25, 2025, the Mexico Judge himself issued a clarifying resolution reiterating that the April 11 Resolution does not have restitutory effects. This means that the April 11 Resolution cannot have any effect on the resolutions related to the Governance Changes of Grupo Dolphin, which are protected by the April 4 Resolution. A copy of the April 25, 2025 Resolution is attached as **exhibit K**.

18. Thirdly, the Mexico Judge himself, noticed the contradiction of his resolutions and, although it is reserved to resolve a motion for accumulation at the Initial Proceeding, to define in



any case which of the orders should prevail, by resolution of April 25, 2025, the Mexico Judge established that the meetings held on March 28, 2025 with respect to the Governance Changes, continue to enjoy validity and the presumption of having been carried out in accordance with the law. Therefore, as of today, the April 11 Resolution, which attempted to suspend the meetings of the Governance Changes, does not limit the effectiveness of the Governance Changes, which are also protected by the April 4 Resolution. This resolution was not appealed by the parties of the proceeding. A copy of the aforementioned April 25, 2025 resolution is attached as **exhibit L**. According to public information available in the File Data Consultation System of the Federal Judiciary Council, two amparos filed by Mr. Albor against the April 4 Resolution issued by the Mexico Judge at the Initial Proceeding have been identified. Said amparos were assigned to the Fourth District Court in the State of Quintana Roo, under files 354/2025 and 406/2025. Since the purpose of such amparo suits is precisely to challenge resolutions issued at the Initial Proceeding, it is reasonable to consider that Mr. Albor is already aware of the Initial Proceeding and the resolutions issued therein.

19. Fourth, the April 11 Resolution contravenes the provisions of Article 384 of the Federal Code of Civil Procedure, because far from maintaining an existing factual situation, it actually alters the existing factual situation. Indeed, the request for an injunction is an ancillary proceeding whose purpose is to maintain an existing factual situation, i.e., to preserve and protect a factual situation or a right pending the resolution of the main litigation. Injunctive relief must be requested by a person with a legitimate legal standing, who must prove the appearance of a good right and the existence of a danger in the delay. If the Mexico Judge had already considered that the appearance of a good right and the danger of delay had been proven to the plaintiffs in the Initial Proceeding, for him it was a notorious fact that the injunctive relief sought by the plaintiff in the Subsequent Proceeding was notoriously incompatible with the April 4 Resolution issued at the



[Illegible
Signature]

Initial Proceeding. This is clear, since the purpose of the April 4 Resolution was precisely to protect the factual situation existing as a result of the resolutions adopted in connection with the Governance Changes. In connection with the foregoing, it should be noted that in the Definitive Stay, the District Judge determined the following with respect to the resolutions adopted in connection with the Governance Changes that are the subject of the April 4 Resolution: (a) “... *the supreme body of a corporation is the shareholders' meeting, for which reason it is considered that only such body would be legitimized to obtain injunctive relief such as those claimed in the present matter, especially if the same attempt against the regular administration of the complaining corporation, reason for which the undersigned judge estimated that such measures are apparently unconstitutional*”. This means that since the injunctive relief that is the subject of the April 11 Resolution was not requested by the shareholders' meeting of the companies of Grupo Dolphin, it is not appropriate for the plaintiff in the Subsequent Proceeding to obtain injunctive relief such as that which is the subject of the April 11 Resolution, since such injunctive relief is contrary to the regular administration of the company that is the plaintiff in the amparo proceeding; and (b) “*it is considered that there is a risk that outsiders may mismanage the representation of the company, which may result in an economic affectation for the plaintiff company and its partners, since there would be a risk that they would lose the control they exercise over the administration of the corporation, This would allow a shareholder to benefit at the expense and above the will of the rest, in addition to the fact that the achievement of the purposes of the corporation could become incompatible with the will of the shareholders' meeting which, according to the aforementioned precept, is the supreme body in a corporation*”. This means that the District Judge considered that the April 11 Resolution could affect the company and its shareholders, since it privileges the interests of a minority over the will of the majority of the shareholders and, in particular, of the shareholders' meeting as the supreme body. As indicated in paragraph 13, as of the date of signature



of this Declaration, the list of resolutions issued and published by the District Court does not reflect that there is a resolution establishing that the counter-guarantee was duly exhibited, nor a resolution declaring that the Definitive Stay has ceased to have effect. Therefore, it is valid to conclude that, as of the date of signature of this Declaration, the Definitive Stay is still in effect.

20. Fifth, I had before me the Extraordinary Shareholder Meeting Minutes and Unanimous Written Consents adopted outside of Shareholders' Meetings, respectively, of the entities that comprise Grupo Dolphin, which were formalized before Marco Antonio Vaca Velez, Notary Public No. 142 of Mexico City, dated May 16, 2025, by virtue of which the shareholders, among other things, ratified the Governance Changes adopted at the Shareholder Meeting Minutes and Unanimous Written Consents adopted outside of Shareholders' Meetings, respectively, dated March 28, 2025 (the “**Governance Change Ratifications**”). The Governance Change Ratifications have been formalized in a public deed and registered before the Public Registry of Commerce. The Public Registry of Commerce is an institution in Mexico that is responsible for providing legal certainty and security through the publicity of legal acts related to commercial companies, in order to be opposable against third parties. The Governance Change Ratifications are legal acts which were validly created, and reflect the will of the shareholders as the supreme body of each entity comprising Grupo Dolphin and that, by virtue of their registration in the Public Registry of Commerce, the resolutions adopted therein are enforceable against third parties. Thus, the legal effectiveness of the Governance Change Ratifications is not limited by the April 11 Resolution. This is so, since on the date of the execution of the Governance Change Ratifications, the April 11 Resolution is not enforceable. Attached hereto as **exhibit M** is one of the meeting minutes notarized before the Notary Public with respect to the Ratifications of the Governance Changes corresponding to the company Controladora Dolphin S.A. de C.V.

21. In conclusion, the April 11 Resolution issued in the Subsequent Proceeding lacks



[Illegible
Signature]

enforceability because: (i) it was contested through the Trustee's Amparo and is suspended pursuant to the Definitive Stay; (ii) it is suspended by the Suspensive Appeal; (iii) as explained in paragraph 17, in view of its contradiction with the April 4 Resolution, the April 4 Resolution prevails since it was issued first and enjoys validity and effectiveness, in addition to the fact that the Mexico Judge is prevented from revoking its own determinations, which is implicit in the contradictions of the April 11 Resolution; (iv) as explained in paragraph 18, the April 11 Resolution expressly establishes that the injunctive relief decreed therein does not have “restitutory effects”, which means that it cannot invalidate previously materialized acts, such as the Governance Changes and the April 4 Resolution issued at the Initial Proceeding; (v) The April 11 Resolution does not affect the Governance Changes in accordance with the resolution referred to in paragraph 19 above; (vi) as explained in paragraph 20, the April 11 Resolution contravenes the provisions of Article 384 of the Federal Code of Civil Procedures, because far from maintaining an existing factual situation, it actually alters the existing factual situation that was previously protected by the April 4 Resolution issued at the Initial Proceeding; and (vii) according to what was explained in paragraph 21, the Governance Change Ratifications are legal acts validly created, which reflect the will of the general shareholders' meeting as the highest body of Grupo Dolphin and which, by virtue of their registration with the Public Registry of Commerce, are enforceable against third parties; and, therefore, the legal effectiveness of the Ratifications of the Governance Changes is not limited by the April 11 Resolution. According to the foregoing, pursuant to the Governance Changes, the Governance Change Ratifications and the April 4 Resolution issued in the Initial Proceeding, it is valid to state that the Sole Manager of Grupo Dolphin is Steven Robert Strom.

22. I am aware that, under the administration of the former Chief Executive Officer, it was requested to subject Controladora Dolphin, S.A. de C.V. to an insolvency proceeding. Said proceeding was filed before the Second District Court in Commercial Bankruptcy Matters, based



in Mexico City and with jurisdiction throughout the Mexican Republic, under file number 1/2025 (the “**Insolvency Proceeding**”). By resolution dated January 28, 2025, the District Judge ordered the injunctive relief attached hereto as **exhibit N** (the “**Insolvency Injunctions**”).

23. Notwithstanding the fact that Controladora Dolphin, S.A. de C.V. requested 19 specific injunctions, the judge only granted the following injunctions: (i) prohibition of Controladora Dolphin from making payments on obligations due prior to the date of admission of the bankruptcy petition; (ii) suspension of judicial or extrajudicial enforcement proceedings against assets or rights of Controladora Dolphin; (iii) prohibition of Controladora Dolphin from disposing of assets or constituting new encumbrances on its assets; (iv) prohibition to transfer funds or assets in favor of third parties, except for those payments that are considered ordinary operations; and (v) prohibition to rescind the agreements entered into with Controladora Dolphin as a consequence of the filing of the Insolvency Proceeding. The injunctions referred to in items (i) to (iv) can be consulted on pages 6, 9 and 14 of the Insolvency Injunctions, where the judge states that they were granted *ex officio*. The injunction referred to in item (v) can be consulted on page 14 of such Insolvency Injunctions.

24. Thus, the purpose of the Insolvency Injunctions was to protect the assets (goods and rights) of Controladora Dolphin, S.A. de C.V. After reviewing the Insolvency Injunctions, I can confirm that the meetings held on March 28, 2025 regarding the Governance Changes of Grupo Dolphin and the April 4 Resolution do not contravene the referred Insolvency Injunctions, since they refer to the exercise of corporate rights of the shares that make up the capital stock of Controladora Dolphin, S.A. de C.V.

25. The shares are nominative certificates that represent a portion of the capital stock of a corporation and that grant their holders (shareholders) the corporate and economic rights that the law and the bylaws of the corporation grant to the referred holders. Therefore, it is evident that the



[Illegible
Signature]

shares issued by Controladora Dolphin, S.A. de C.V. are not assets of such company, since they are only part of the equity of their holders. Article 134 of the General Law of Commercial Companies establishes the general rule that a company cannot acquire the shares issued by it. Therefore, it is evident that the shares representing the capital stock of Controladora Dolphin, S.A. de C.V. are not assets of such company, since they are only part of the patrimony of their holders.

26. Pursuant to the Governance Change meetings, the holders of voting rights of Grupo Dolphin adopted resolutions that do not affect or impact any property or rights of Controladora Dolphin, S.A. de C.V. Likewise, since the shares that Controladora Dolphin held in the other companies of Grupo Dolphin were transferred to the guarantee trust identified in the meetings and resolutions of the Governance Changes, they were extracted from the assets of Controladora Dolphin, S.A. de C.V. and were transferred to the trustee's assets for the purposes agreed in the trust agreement. Attached as **exhibit O**, is a judicial precedent that confirms such criteria.

27. The Insolvency Injunctions do not contain any order that prevents Controladora Dolphin's shareholders and/or the holders of the corporate rights of the shares of Grupo Dolphin from deciding on the Governance Changes. Therefore, it is valid to conclude that the Governance Changes did not contravene the Insolvency Injunctions.

28. Finally, I had before me the interstate judicial request issued by the Mexico Judge on April 7, 2025, attached hereto as **exhibit P** (the “**Interstate Judicial Request**”), by means of which he requested the assistance of a local judge with jurisdiction in Cancun, Quintana Roo, for the enforcement of the April 4 Resolution. Likewise, I had before me the resolution of April 10, 2025, attached hereto as **exhibit Q**, by means of which the First Commercial Judge of Cancun, Quintana Roo admitted the Interstate Judicial Request and ordered its enforcement (the “**Enforcement Order**”). From the content of the Interstate Judicial Request and the Enforcement Order, it is clear that the Sole Manager appointed in the Governance Change meetings, was



legitimized and legally enabled to take control of the assets and operation of Grupo Dolphin. On this regard, it is relevant to emphasize that the April 4 Resolution ordered to issue official communications to the Tributary Administration Service (Mexican tax authority similar to the US Internal Revenue Service) and to the National Banking Commission (Mexican authority that supervises Mexican financial institutions) to: (i) inform about the removal of the board members of Grupo Dolphin as result of the Governance Changes; and (ii) request the implementation of all necessary actions to update their records and enable Steven Robert Strom, as new Sole Manager, to operate the business of Grupo Dolphin.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Executed on this 16th day of May, 2025.

By: [Illegible
Signature]

Margarita Luna Ramos



I, the undersigned, **Mr. David Suro**, authorized by the **Superior Court of Justice of Mexico City** (*Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México*) to practice as English and Spanish Official Expert Translator, as set forth in **Resolution 42-02/2024**, published in its Gazette for Legal Notices & Advertisements (*Boletín Judicial*) on **23 February 2024** issue No. 34, Tome CCIII, page 34, and listed in the **Registry of Auxiliary Official Experts for the Public Administration** under **No. 161, DO CERTIFY** that this document consisting of 15 (fifteen) page (s) , is an accurate translation to the best of my knowledge, of the source document that I had at sight.

Mexico City, May 16th, 2025.

DIRECTUM TRANSLATIONS



El suscrito perito **David Suro Cárcamo**, autorizado por el **H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México** para ejercer como **Perito Traductor** del idioma español e inglés, conforme se establece en el Acuerdo **42-02/2024**, publicado en el *Boletín Judicial*, *Órgano Oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México* el **23 de febrero de 2024**, No. 34, **Tomo CCIII**, acreditado en la *Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia* con el **No. 161**, **CERTIFICO** que el presente documento que consiste de 15 (quince) fojas es una traducción fiel, completa y fidedigna a mi leal saber y entender del documento original que tuve a la vista.

Ciudad de México a 16 de mayo de 2025.

DIRECTUM TRANSLATIONS

